

# EL MUNDO

Viernes, 31 de diciembre de 2004. Año XV. Número: 5.500.

## OPINION

### TRIBUNA LIBRE

## Desafío al Estado

JORGE DE ESTEBAN

Si el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no previó un plan de acción ante las nevadas que se anunciaban en España la semana pasada, menos aún parece haber previsto lo que ha sucedido ayer en el Parlamento de Vitoria. Y, sin embargo, era algo posible de predecir ante la actual situación política que se vive hoy no sólo en el País Vasco, sino también en toda España. Lo que está ocurriendo no es ni más ni menos que el asesinato premeditado, especialmente por parte de los nacionalismos vasco y catalán, del espíritu de la Transición. En efecto, la operación política denominada con este nombre respondía en la voluntad de quienes la concibieron primero y de la de los que la llevaron a cabo después, al intento de superar de una vez el guerracivilismo congénito de nuestro país, que ha sido característico de los últimos siglos.

El paso de la legalidad franquista a la democrática, se hizo sin solución de continuidad a través de una norma puente que fue la Ley para la Reforma Política. De esa manera, por primera vez en España no había ni vencedores ni vencidos, por lo que se pudo alumbrar una Constitución que también, por primera vez en nuestra Historia, consistía en una Constitución pactada entre los partidos políticos y las regiones españolas. Este espíritu de contrato político, sublimado en el artículo 2 de la Constitución, es el que ha permitido que España haya gozado durante casi 30 años del periodo más fructífero de su Historia. Por primera vez también ya no había presos políticos ni desterrados o exiliados por sus ideas. Es cierto que seguíamos padeciendo el terrorismo de ETA, pero no se trataba más que de la última de las secuelas de la dictadura franquista, que empezaba ya a ser derrotada policialmente.

Pero este clima de convivencia lo están rompiendo los nacionalismos vasco y catalán, con sus continuas reivindicaciones, que hoy se concretan en pedir que se desmantele un Archivo Nacional en Salamanca o en exigir selecciones deportivas autonómicas, y que mañana consistirán en reclamar la luna como suya.

¿Cómo se ha podido llegar a este orden de cosas que empieza a preocupar seriamente a los españoles? Pues probablemente por dos claras causas. Por

una parte, gracias al defecto mayor de nuestra Constitución, que es sin duda el Título VIII referente a la organización territorial del Estado. En lugar de haberse redactado un título de gran precisión, debido a lo delicado del tema, se concibió un confuso sistema autonómico acordeón que permitía, según las reivindicaciones de cada región, ir ampliando hasta el infinito sus competencias. Este sistema, junto a una ley electoral que favorecía a los partidos nacionalistas de mayor raigambre en cada comunidad autónoma, ha tenido como resultado el pavoroso panorama en que nos encontramos ahora. Dos gobiernos tripartitos, uno en el País Vasco y otro en Cataluña, quieren un nuevo Estatuto que, especialmente en el caso vasco, sobrepasa ampliamente el vigente marco constitucional.

Pero todo esto se veía venir desde hace tiempo y, sin embargo, en los últimos meses no parece haberse previsto nada para detener lo que se nos venía encima, salvo grandes dosis de talante. Porque, por otra parte, da la impresión que desde el Gobierno se está dejando hacer al PNV, a fin de que pueda llevar a término su objetivo seudoseparatista. Desde un punto de vista democrático, había ciertamente posibilidades de impedir que se pusiese en marcha el infernal plan Ibarretxe. ¿Se puede concebir que en un país moderno se ilegalice a un partido político por su conexión con una banda terrorista y, sin embargo, se siga permitiendo que se mantenga en el Parlamento vasco, por el mero hecho de cambiar el nombre de Batasuna por el de Sozialista Abertzaleak? La democracia es un sistema noble de gobierno, pero lo que no puede ser es un sistema masoquista de autodestrucción. ¿Cómo es posible igualmente que no se haya reprobado por PSOE y PP a un presidente de la asamblea legislativa que se niega a disolver a un grupo parlamentario ilegal o a repetir una votación cuando, por razones electrónicas, se niega el derecho del voto a una parlamentaria?

No cabe duda de que la estulticia de este Gobierno en el tratamiento de los nacionalismos es cada vez más explícita. Como es sabido, una vez que el presidente vasco ha conseguido ayer la aprobación de su plan en el Parlamento, ahora dará un segundo paso que consiste en convocar un referéndum ilegal para que se pronuncien los electores vascos. Y lo curioso del caso es que precisamente una de las primeras medidas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue la de suprimir del Código Penal la penalización de la convocatoria de referendos no permitidos por la Constitución y sus leyes de desarrollo.

Es más: todos sabemos que en lo que respecta a los nacionalismos vasco y catalán, siempre hay un sentido primero de imitación y luego de superación, a objeto de comprobar quién es el que llega más lejos. Por supuesto, siempre se suele decir que los catalanes saben reivindicar sus objetivos de forma más astuta, en contraposición con la mayor brusquedad de los vascos.

Sea lo que fuere, la realidad es que con la aprobación del plan Ibarretxe, los nacionalistas vascos se anticipan a los nacionalistas catalanes en su carrera hacia el Dorado soñado. Sin duda, los hechos galopan más deprisa que las ideas. Por consiguiente, la incógnita es saber si el señor Carod-Rovira, auténtico factotum de los gobiernos central y catalán, dejará que los nacionalistas vascos lleguen antes que los catalanes. Porque es lamentable que a pesar de todo sean sólo unos cuantos políticos los que están consiguiendo sus previsiones fantasiosas, sin que cuenten más que con una parte minoritaria de los ciudadanos vascos y catalanes. Es igual: lo que se quería ya se va a conseguir, esto es, un nuevo enfrentamiento entre españoles, la renuncia a la convivencia pacífica y, en una palabra, la demolición o deconstrucción de la nación española.

Todo esto lo debía y podía haber previsto el Gobierno y, a pesar de todo, no lo ha hecho. La consecuencia es que se le empiezan a amontonar los problemas con los nacionalistas y, en tal sentido, cabría afirmar que existe una regla sociopolítica, ya experimentada desgraciadamente en España, que radica en que cuanto más débil es el Gobierno central, más fuertes se muestran los nacionalistas.

A ver por tanto qué medidas piensa tomar el Gobierno socialista para evitar, ante este claro desafío al Estado, lo que, siendo previsible, puede convertirse en probable. Porque, en definitiva, como decía aquél, las revoluciones siempre se hacen, como los toros, con el permiso de la autoridad.

**Jorge de Esteban es catedrático de Derecho constitucional de la Universidad Complutense y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.**